



SENADO DE LA NACION

SECRETARIA
PARLAMENTARIA

DIARIO DE ASUNTOS ENTRADOS

AÑO II - Nº 88

MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE

DIRECCION PUBLICACIONES

SUMARIO

I

PODER EJECUTIVO

- 1.—Mensaje y proyecto de ley por el que se dispone la extinción de la acción penal, vencido determinado lapso, contra miembros de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, imputados en el marco de la represión contra la subversión (P.E.-466/86). (Defensa Nacional y Legislación General.) (Pág. 1791.)
- 2.—Comunica la ampliación del temario para la convocatoria a sesiones extraordinarias (P.E.-467/86). (Al archivo.) (Pág. 1792.)

II

SENADORES

- 3.—Amoedo: de ley. Por el cual se deroga el artículo 64 de la ley 2.393 (de matrimonio civil) (S.-887/86). (Legislación General y Familia y Minoridad.) (Pág. 1793.)
- 4.—Jiménez Montilla: de comunicación. Solicitando se incremente el próximo presupuesto educativo (S.-888/86). (Presupuesto y Hacienda y Educación.) (Pág. 1793.)
- 5.—Mathus Escorihuela: de ley. Por el que se establece un sistema de evaluación del impacto ambiental en grandes proyectos públicos (S.-889/86). (Recursos Naturales y Ambiente Humano y Obras Públicas.) (Pág. 1794.)
- 6.—Mathus Escorihuela: de resolución. Por el que se solicita no aplicar el desagio en la liquidación de los subsidios por forestación que otorga el Instituto Forestal Nacional (S.-890/86). (Agricultura y Ganadería.) (Pág. 1797.)

I

PODER EJECUTIVO

1

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1986.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de poner en su consideración un proyecto de ley que dispone la extinción de la acción penal, vencido determinado lapso, contra miembros de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias imputados por delitos cometidos en el marco de la represión contra la subversión.

La Argentina padeció una cruel violencia durante varios y tristes años. En la década del sesenta, luego de un nuevo quebrantamiento institucional, el terrorismo atacó severamente a la sociedad y a sus instituciones, sembró la muerte como único método de acción política y engendró dolor y rencor en el ánimo de los afectados.

Con el invocado propósito de combatir esa subversión, se derrocó al gobierno constitucional y sin sujeción a límite jurídico alguno se ahondó la violencia, esta vez desde el Estado mediante el sistema represivo implantado.

Frente a la situación derivada de las graves violaciones a los derechos humanos que fue inherente a la forma de represión del terrorismo utilizada por el régimen que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976, el gobierno democrático trazó una política tendiente a lograr los siguientes objetivos:

a) Restablecer el imperio de la ley impidiendo la impunidad de los grandes responsables de esos delitos y de quienes se hubieran excedido en el cumplimiento de las órdenes recibidas;

b) Asegurar que ello se lograra por los medios previstos en la Constitución, es decir, por la acción de los órganos jurisdiccionales competentes a través de procedimientos que respetaran la plena vigencia de la garantía de defensa en juicio;

c) Prevenir que el espíritu de justicia, deformado por la pasión, fuere el marco que hiciera posible una campaña de venganza, punto de partida de una nueva etapa de violencia, que la sociedad argentina rechaza;

d) Lograr que ello se desarrollara en el menor tiempo posible, para aventar rápidamente el estado de

sospecha indiscriminada que se proyectaba sobre las fuerzas armadas como instituciones y para permitir que la totalidad de los argentinos clausurara una de las etapas más oscuras de la historia nacional, de modo que, reconciliados sobre la base de la verdad y justicia, pudiéramos proseguir juntos la urgente tarea de reconstruir la Nación.

La política del gobierno nacional obtuvo logros importantes, evaluados como tales en el país y en el exterior. Pero existe, de manera manifiesta una dificultad provocada por el largo tiempo insumido por las investigaciones, con el consiguiente retraso en la asignación de responsabilidades.

Las causas son variadas pero, cualesquiera fueren ellas, lo cierto es que ese retraso afecta de modo directo a las personas perjudicadas por la represión ilegal y a un núcleo indeterminado del personal de las fuerzas armadas que experimenta dudas acerca de su eventual situación procesal.

El hecho de que los delitos fueran ordenados desde los comandos en jefe de las fuerzas armadas generó la apariencia de una responsabilidad generalizada respecto de todo su personal.

A su vez, la clandestinidad con que se impartieron y cumplieron tales órdenes torna difícil la tarea de esclarecimiento de la verdad que compete a la justicia.

Ambos factores concurren para que miembros de las fuerzas armadas y de seguridad que prestaron servicio durante la represión del terrorismo y que encuadraron su conducta dentro de la legalidad sufrieran la incertidumbre de ser objeto de procesamiento desde el momento en que el gobierno democrático dispuso promover los juicios de responsabilidad.

Cuando una situación tal se produce en un contexto como el señalado en los puntos anteriores se torna razonable establecer un régimen tendiente a resguardar de modo especial la garantía de la pronta terminación de los procesos, con beneficio asimismo para la consolidación de la paz social y la reconciliación nacional.

Por ello se proyecta, en el artículo primero, un plazo de extinción de la acción penal que permita en el menor tiempo razonable liberar de aquel estado a quienes a más de tres años de iniciadas las investigaciones, no hayan sido sometidos a la acción de la justicia ni tengan definida su situación procesal.

La limitación a la persecución penal que comporta esta ley se refiere a los hechos realizados en el curso de la acción contra el terrorismo, de conformidad con la jurisprudencia vigente.

A la vez se otorga a las cámaras federales la facultad de examinar el estado de las causas al eventual fin de la avocación prevista por el último párrafo del artículo 10 de la ley 23.049. En ese mismo orden de ideas se fija un plazo para denunciar aquellos hechos que aún no hubieren llegado a conocimiento de la Justicia.

Se propicia también una norma destinada a evitar que el personal en actividad que pueda ser sometido a proceso sea sustraído del servicio en caso de que su superior lo considere necesario.

La prisión preventiva, puesto que supone la restricción de la libertad respecto de quienes deben ser considerados inocentes por imperio constitucional, sólo se justifica en cuanto sea necesaria para evitar que el procesado eluda la acción de la Justicia. Dado que el sometimiento a la disciplina castrense permite un control específico de la libertad ambulatoria, se extiende un régimen ya previsto en el Código de Justicia Militar que permite conciliar ambas exigencias.

La restante disposición tiene sólo por efecto evitar que las cuestiones de competencia pendientes o a suscitarse, o demoras injustificadas en la remisión de las causas, determinen el acotamiento o la extinción del plazo fijado en el artículo 1º, sin que el tribunal competente pueda cumplir cabalmente su función jurisdiccional.

Honorable Congreso: Con este proyecto de ley el Poder Ejecutivo no duda que, poniendo fin a una situación de incertidumbre jurídica, contribuirá a la pacificación de los espíritus y al afianzamiento del encuentro entre los argentinos.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.294.

RAÚL R. ALFONSÍN.

Antonio A. Tróccoli. — Dante M. Caputo.
— José H. Jaunarena. — Juan V. Sourrouille. — Pedro A. Trucco. — Julio R. Rajneri. — Hugo M. Barrionuevo. — Conrado H. Storani.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Se extinguirá la acción penal contra todo miembro de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales y Penitenciarias imputado por su presunta participación, en cualquier grado de autoría, en delitos que pudieran haberse cometido con motivo u ocasión de hechos acaecidos en el marco de la represión, hasta el 10 de diciembre de 1983, que no fuere citado a prestar declaración indagatoria por tribunal competente dentro de los sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha de promulgación de la presente ley,

o que, habiéndolo sido con anterioridad, no se encuentre procesado ni lo fuere dentro de dicho plazo.

Art. 2º — Dentro del término establecido por el artículo precedente, las cámaras federales competentes podrán examinar el estado de las causas que tramitan ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, avocándose a las mismas en el supuesto contemplado en el último párrafo del artículo 10 de la ley 23.049.

Art. 3º — Toda denuncia de hechos como los descritos en el artículo 1º sobre los que a la fecha de promulgación de la presente no hubiese tomado conocimiento la Justicia podrá ser formulada ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas dentro de los primeros treinta (30) días del plazo previsto en ese artículo. Vencido este término quedará extinguida la acción penal correspondiente.

Art. 4º — Cuando en las causas en trámite se ordenaren respecto del personal en actividad, cualquiera fuera su rango, medidas de las previstas en el título XVII, del libro segundo, del Código de Procedimiento en Materia Penal, o en el título VII, de la sección II, del libro II del Tratado Segundo del Código de Justicia Militar, tales medidas se harán efectivas bajo el régimen del inciso 2º del artículo 315 de este último código, a petición del jefe de la unidad en que prestare servicio aquel personal, o de cualquier otro oficial superior de quien dependiese. En ese caso, el superior será responsable de la comparecencia inmediata del imputado, todas las veces que el Tribunal lo requiriere.

Art. 5º — Las cuestiones de competencia que se susciten suspenderán el cómputo del plazo establecido en el artículo 1º. Tampoco se computará el lapso comprendido entre la fecha de notificación al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas del requerimiento de la cámara federal competente en el caso del artículo 2º, y a la fecha de recepción de la causa por ésta.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Antonio A. Tróccoli. — Dante M. Caputo.
— José H. Jaunarena. — Juan V. Sourrouille. — Pedro A. Trucco. — Julio R. Rajneri. — Hugo M. Barrionuevo. — Conrado H. Storani.

—A las comisiones de Defensa Nacional y de Legislación General.

2

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1986.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, acompañando copia del decreto 2.268 dictado con fecha 3 de diciembre de 1986, por el cual se amplía el tema de convocatoria a sesiones extraordinarias del Ho-